



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20261010118511**
20261010118511
Fecha: **07-04-2026**

Bogotá D.C., 06 de abril 2026

Doctor

JUAN ALBERTO DUQUE GARCÍA

Secretario General

Comisión Cuarta Constitucional Permanente

Cámara de Representantes – Congreso de la República

comision.cuarta@camara.gov.co

No. de radicado al que responde:

ASUNTO: Respuesta a comunicación relacionada con la Proposición No. 095 de 2026, (aprobada el 18 de marzo de 2026).

Respetado Doctor Duque,

Con relación a la comunicación del asunto, por medio de la cual solicita información para citación a debate de Control político de la Proposición No. 095 de 2026, asociada al Proyecto de Ley 270 de 2025 Cámara "Por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 que expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", la Agencia Nacional de Infraestructura da respuesta en el marco de sus competencias y de acuerdo con la información suministrada por las Vicepresidencias Jurídica y de Planeación, Riesgos y Entorno, en los siguientes términos:

1. ¿Qué comentarios tiene su entidad respecto al Proyecto de Ley 270/2025 Cámara de Representantes.

Respuesta:

Los comentarios al proyecto de ley 270 de 2025, se encuentran en el Anexo 1 a la presente respuesta, en el documento denominado "**FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE LEY**".

2. Bajo el modelo actual de contratación en su entidad, ¿cómo se desarrolla en los desafíos y objetivos misionales propios y cómo alteraría la mencionada iniciativa legislativa el proceso de contratación?

Respuesta:

La ANI es la entidad responsable de estructurar, contratar y supervisar proyectos viales de infraestructura mediante concesiones y APP. Sus procesos de contratación actuales están regulados por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, así como por manuales internos que incorporan planificación, Comité de Contratación y seguimiento de riesgos.



El Proyecto de Ley 270/2025 propone cambios sustantivos: introduce el “**principio del poder preferente**”, un **incidente de objeciones ciudadanas** en selección y ejecución, límites rígidos a anticipos/adiciones, obligación de reglamentar contratación directa, reforzamiento de audiencia de adjudicación, fortalecimiento del control concomitante (tiempo real) y nuevas reglas de conciliación/arbitraje judicial.

• **Impactos normativos clave:**

- 1) El proyecto añade un *incidente de objeciones ciudadanas* con trámite de 10 días, dando voz formal a veedurías y comunidades durante selección, ejecución y liquidación.
- 2) Establece el principio de ejecución “preferente” por parte del Estado, imponiendo un test de capacidad administrativa y fomentando la contratación directa estatal o alianzas público-populares antes que con privados.
- 3) Modifica las potestades unilaterales: fija un umbral del 20% de afectación grave para interpretación y modificación contractual, e impone conciliación previa en dichos casos.
- 4) Redefine la caducidad obligatoria si la ejecución es <20% y permite continuidad con otro garante/contratista.
- 5) Introduce tope rígido a anticipos (35%) y a adiciones (25% una sola vez), lo que restringe la capacidad de ajustar contratos de infraestructura.
- 6) Requiere reglamento expreso para contratación directa (plazo 6 meses) y, de no expedirse, prohíbe cualquier contratación directa.
- 7) Amplía la audiencia pública de adjudicación (2 sobres en licitación de obra) y visibiliza la publicación de actos contractuales en SECOP con obligación de publicidad completa.
- 8) Refuerza el control fiscal real-tiempo con participación ciudadana activa y obliga a conciliación judicial obligatoria tras pruebas, sancionando la temeridad.

• **Riesgos y oportunidades:**

- *Riesgo de alargamiento de plazos:* El incidente de objeciones y audiencias adicionales puede enlentecer adjudicaciones y ejecuciones, lo que complica los cronogramas de proyectos misionales. Sin embargo, aumenta la transparencia con mayor participación ciudadana en la gestión contractual.
- *Riesgo de litigiosidad ampliada:* La caducidad obligatoria al 20% de ejecución y límites a modificaciones podrían incentivar conflictos legales y reclamaciones de equilibrio económico. Oportunamente, la conciliación obligatoria y refuerzo de arbitraje pueden resolver controversias más rápido si se aprovecha bien.
- *Restricción operativa:* El “principio preferente” puede tensionar los contratos tipo concesión/APP (cuenta en sus estatutos pública) si se interpreta que la ANI debe ejecutar obras directamente, afectando alianzas público-privadas. Como



oportunidad, obliga a justificar técnicamente cada contratación y puede fortalecer capacidad institucional interna.

- **Complejidad administrativa:** Se incrementa la carga de cumplimiento (nuevos trámites, controles internos y coordinaciones) lo que supone riesgo de errores o omisiones. A la vez, estos mecanismos pueden mejorar la gestión de riesgos en el largo plazo y la confianza ciudadana, al elevar la vigilancia externa.
- **Recomendaciones prácticas inmediatas:**
 - **Fortalecer protocolos internos:** Crear guías y formatos para tramitar el nuevo incidente de objeciones (plazos de respuesta, roles, notificaciones) y entrenar al equipo jurídico-contratación en su implementación.
 - **Revisar y actualizar cláusulas tipo:** Ajustar contratos estándares (concesiones y consultorías) para incorporar las nuevas reglas de modificación, terminación y caducidad (umbral 20%) y asegurar cumplimiento de requisitos procesales (conciliación previa).
 - **Planificar capacitación transversal:** Brindar formación urgente a todo el personal de contratación, supervisión e interventoría sobre los cambios normativos (principio preferente, control concomitante, conciliación obligatoria) e iniciar diálogo con Procuraduría y Contraloría para coordinar expectativas en la nueva fase de participación ciudadana.
 - En síntesis, la ANI debe prepararse ante reformas que elevan la participación social y establecen procedimientos más rígidos. Aunque ello implica mayores cargas y riesgos en plazos y litis, también abre oportunidades para fortalecer la transparencia interna y la trazabilidad de la contratación.

3. ¿Cuál es el valor total de los contratos en 2024 que licitan, contratan o concesionan con privados? Detallar en archivo en formato Excel.

De acuerdo con la información consolidada en el archivo "Ctos modo Carretero 2024", el valor total de los contratos carreteros vigentes, indexado a diciembre de 2024, asciende aproximadamente a: \$122.6 billones de pesos colombianos (COP), cifra que corresponde a la sumatoria de los contratos de concesión carreteros celebrados por la Agencia Nacional de Infraestructura bajo esquemas de Asociación Público-Privada y concesión tradicional.

Este valor refleja la magnitud de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado en materia de infraestructura vial, y constituye un insumo esencial para el análisis presupuestal y de riesgos asociado a la eventual aplicación de las reformas legislativas en discusión.

De acuerdo con el requerimiento, se informa que los proyectos del modo carretero para el año 2024 se relacionan en el archivo Excel denominado "Ctos modo Carretero 2024".



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20261010118511**
20261010118511
Fecha: **07-04-2026**

El valor de los contratos correspondientes a los modos portuario, aeroportuario, fluvial y férreo se encuentra relacionada en los archivos en Excel adjuntos a la presente comunicación.

En consecuencia, son estos registros los que determinan y soportan el valor total consolidado que se presenta en la respuesta institucional.

4. Realice una proyección presupuestal y temporal sobre cuándo y cómo la entidad podría adoptar los cambios propuestos en la iniciativa legislativa ya descrita.

Respuesta:

Una vez realizada la validación al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura, se informa que la Entidad no tiene competencia para efectuar la proyección presupuestal y temporal solicitada, por tratarse de aspectos propios de la política fiscal y presupuestal del orden nacional. Por lo anterior, la ANI mediante comunicación con radicado 20261010113461 del 31 de marzo de 2026 dio traslado de este requerimiento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se adjunta copia de la mencionada comunicación.

Los documentos se entregan en medio digital, razón por la cual se podrán consultar en el siguiente enlace¹:

https://anionline-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lgeronimo_ani_gov_co/IgDS98-JBSCoSIT1tGTIHzkTAerUTDBD2qzmscDChWHEkX0?e=zhkYhX

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, estando atentos a precisar cualquier información adicional al respecto.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER TORRES YARZAGARAY

Presidente

Agencia Nacional de Infraestructura

Anexos: Enlace de onedrive con anexos

cc:

Proyectó:

VoBo:

MILENA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ VICE, ARIEL LOZANO GAITAN VICE, LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ, JUAN CARLOS BURGOS ROLON GERENTE, KELLY ROSE MARTINEZ ARIAS, CARLOS ALEXANDER VARGAS GUERRERO 1, RAFAEL FRANCISCO GOMEZ JIMENEZ G.FLUVIAL, SINDY LISETH PUMAREJO QUINTERO, SANDRA MILENA VASQUEZ MANCERA G.CARRETERO (E), LEONARDO ORTIZ MENDIETA, CLAUDIA ESPERANZA MEDINA PINZON, DANY WILSON ORTIZ ROA 1, ELISABET FERNANDEZ MONROY (E), JUAN JAVIER GUIDO GONZALEZ, PAOLA ANDREA VELASQUEZ CARRILLO, JULIAN DAVID RUEDA ACEVEDO VICE (E), YINA MARCELA GARCIA PINO

Nro Rad Padre:

Nro Borrador: 20261010025102

GADF-F-012

TC-999

¹ Se recomienda de manera respetuosa copiar y pegar el enlace en la barra de navegación en exploradores de internet como "Google Chrome", "Mozilla Firefox" y "Microsoft Edge".